

Iniciativa sin política de Estado

José Luis Piñeyro

27 de octubre de 2007

Las últimas semanas ha habido una serie de declaraciones a medias y contradecaraciones por parte de funcionarios públicos sobre el antes Plan México, hoy rebautizado como Iniciativa Mérida de asistencia policiaco-militar estadounidense. Lo único que queda claro es la descoordinación entre algunas secretarías de Estado mexicanas y estadounidenses, la secrecía de los compromisos políticos acordados con EU, el menosprecio de ambos presidentes por sus respectivos poderes legislativos y, por supuesto, de sus en principio representados, los pueblos de ambos países.

No abordaremos las muy posibles repercusiones negativas para la soberanía territorial, política e institucional mexicana, tema de anteriores ensayos nuestros y de otros colaboradores de este periódico; hoy sólo señalaremos brevemente cómo el Plan México no corresponde a una Política de Estado Democrática (PED) respecto de seguridad pública y nacional.

Rasgos de una PED son, entre otros, incorporar un visión temporal de largo plazo y espacial para todo el territorio, con una delimitación de objetivos precisos y permanentes, es decir, contempla el desarrollo regional y nacional y metas verificables sobre los avances contra el narcotráfico, no sólo golpes espectaculares (por cierto, el PM no incorpora sustitución de cultivos agrícolas de drogas, al inicio propuesta en el Plan Colombia); igualmente, es básico el consenso de las clases sociales, o sea, la firma del acuerdo nacional, inexistente no sólo en política de seguridad pública sino en política social, económica, comercial, industrial, militar; también debe contar con flexibilidad para cambiar ante escenarios de emergencia o imprevistos internos o internacionales; si el narcotráfico cambia de tácticas como aumentar las ejecuciones para generar temor entre las distintas policías y la ciudadanía o fomenta mayor drogadicción, debe confrontarse con campañas reales de participación social, prevención de la drogadicción y rehabilitación de adictos, y no insistir sólo en el enfoque represivo.

Asimismo, debe contar con instituciones estatales eficaces y transparentes con suficiente presupuesto para desempeñar sus misiones, pero honestidad, eficiencia y presupuesto no sólo para seguridad pública sino social, laboral y alimentaria; de igual manera, debe establecer alianzas estratégicas o tácticas con estados o bloques regionales afines al proyecto nacional; persistir en la condicionada asistencia policiaco-militar de EU sólo generará más dependencia técnica, tecnológica y política; existen otros países en América Latina y Europa para obtener esa asistencia.

Una PED debe contar con una contraloría gubernamental y social para supervisar al gobierno y a las instituciones estatales; los consejos ciudadanos deben ser efectivos y no máscaras de participación; igualmente, comprende un Poder Legislativo profesional y ágil con acuerdos básicos interpartidistas y con un poder presidencial que actúe como jefe de Estado y no de partido de gobierno.

Ayer Raymundo Riva Palacio mostró en su columna el pobre papel del Senado en la comparecencia de la canciller, mientras que Calderón actúa más como administrador semicolonial y de partido que como estadista; otra característica de una PED es la coordinación y cooperación interinstitucional estatal y no la complicidad interinstitucional donde una institución oculta a otra en sus errores de ejecución política; de igual modo, es central la vigencia de órganos del Poder Judicial autónomos y expeditos; el PM no es sólo dotación de equipo aéreo y de comunicación, sino modernización judicial, frente a lo que jueces anónimos señalan: "Nada más falta que nos capaciten para juzgar a migrantes, guerrilleros y narcotraficantes como terroristas". Una PED que, sobre todo, responda a las necesidades materiales y morales de la nación y legitime y fortalezca las instituciones del Estado. Que responda a los verdaderos intereses nacionales.

A propósito de necesidades, el enfoque represivo antinarcóticos da prioridad al elemento técnico (más aeronaves, computadoras, entrenamiento) y subestima el elemento humano en el aspecto moral: de 2000 a 2006 desertaron 107 mil militares, un promedio de 45 diarios; en la Policía Federal Preventiva de 1999 a 2006 desertaron casi 5 mil militares, revela ayer la contribución de Jorge Luis Sierra en EL UNIVERSAL. La guerra antinarcóticos no se gana sólo con modernos elementos materiales, sino también con morales y amplia y permanente participación ciudadana. Romper con la visión estatocéntrica como solución exclusiva contra la inseguridad pública es fundamental, así como con la obsesiva subordinación estratégica a EU.

jlpineyro@aol.com

Profesor investigador UAM-A